

Año 1
Número 2
Invierno 2015

Revista de Políticas Sociales

Modelo de asistencia en momentos de aumento de consumo

Antecedentes para la lectura

Ana Joséfina Arias
 Docente de la
 Licenciatura
 en Trabajo Social
 UNM
 anaarias@sociales.uba.ar

Estas líneas buscarán reflexionar acerca de un conjunto de preguntas que sugiere el aumento del consumo en contextos de pobreza –en palabras de Kessler (2011), la coexistencia de pobreza y consumo–, y se intentará forzar estas preguntas para relacionarlas con posibles modificaciones a las políticas sociales. En este momento de nuestras investigaciones nos encontramos abocados a actualizar un esquema para modelizar intervenciones institucionales a fin de poder discutir, más allá de las acciones particulares, las líneas o dimensiones generales que configuran la intervención social en esta etapa. En este intento, y comparando con la tendencia de los períodos anteriores, es que nos encontramos con una nueva situación con relación a las poblaciones pobres: crecimiento o democratización del consumo por parte de los sectores populares. Las cuestiones aquí analizadas no son exclusivas de tales sectores populares, sino que dan cuenta de tendencias mayores. En este artículo sólo nos limitaremos a señalar los impactos que identificamos en la relación entre aumento del consumo, políticas sociales y población en situación de pobreza. *La hipótesis que intentamos componer es que el modelo de asistencia y promoción que caracterizamos en estudios anteriores* (Arias, 2011) *estaría superado por un nuevo modelo que relaciona la modificación de la intervención asistencial por modalidades integradoras a partir del consumo*. Para esto identificaremos en primer lugar algunas constantes acerca de las lecturas sobre el consumo en los sectores populares, luego algunos aspectos considerados como principales logros en términos de avance en la mejora de las condiciones de vida y posteriormente algunos interrogantes en la relevancia que tiene el consumo como estructurador de relaciones de integración social.

El aumento del consumo popular y especialmente la posibilidad de acceder a consumos no imprescindibles es un viejo tema en el repertorio de juicios y de prejuicios sobre los sectores populares y su relación con los bienes y el dinero. En un libro de reciente aparición, Natalia Milanésio (2014) señala los cambios en la aparición del obrero como consumidor durante el primer peronismo. La aparición de este sujeto como consumidor llevó aparejada una variada crítica acerca de la utilidad de las formas del gasto. Los clásicos *slogans* acerca del asado con parquet convivieron con un cambio relevante de las formas publicitarias que empezaron a reconocer otros destinatarios. Parece ser una constante la idea que el que estos sectores mejoren sus consumos es improcedente, en tanto no aporta significativamente al desarrollo de la sociedad en general, ni a la mejora de las condiciones sociales para el futuro, etcétera. Esta falacia queda claramente desmentida en el estudio señalado. La autora concluye su libro planteando que: “la centralidad del consumo para la historia y la vida moderna es indiscutible, así como es irrefutable que, a pesar de los riesgos políticos, los peligros sociales y el deterioro cultural que los críticos esgrimen tanto hoy como en el pasado, el consumo continúa siendo un mecanismo vital para el desarrollo de la cultura popular y la creación de conciencia y solidaridad” (Milanesio, 2014: 238).

Las dudas acerca de cómo quienes tienen carencias pueden utilizar el dinero es un prejuicio latente que vuelve a aparecer reiteradamente. Por ejemplo, un senador planteó la improcedencia de las transferencias de dinero de la Asignación Universal por Hijo (AUH) planteando que sería utilizada para “drogas y bingo”. Con mayor nivel de sofisticación, en las políticas alimentarias se justificaron las prestaciones en alimentos y no en dinero porque se partía de una supuesta falta de conocimiento

de determinados sectores para realizar las compras, y también del temor acerca de la utilización de este dinero en cuestiones inconvenientes.

En otro libro recientemente publicado, *Lógicas sociales del consumo*. El gasto improductivo en un asentamiento bonaerense (Figueiro, 2013), se analizan los consumos considerados “improductivos” en sectores populares en la década pasada. En este libro de Figueiro se plantea cómo el consumo no puede explicarse desde un enfoque de optimización de recursos cuando estos consumos, como todos, tienen una relevancia en términos sociales y simbólicos que van más allá de la planificación desde una racionalidad considerada universal.

En este análisis los consumos relacionados con la identidad, con las lógicas de reciprocidad, explican una cantidad importante de estos gastos, como por ejemplo los propios de las fiestas, dentro de una red de sentido. Asimismo, la relación con el tiempo es algo muy significativo en el análisis de estas prácticas. Las modificaciones de las formas de ahorro para sectores populares que proponen endeudamientos a tasas mucho más leoninas que las que acceden los sectores medios, y las dificultades de prever el flujo de dinero que ingresará, llevan a una mayor relevancia del presente: “darse el gusto hoy” resulta absolutamente sensato.

Consumos e institucionalidad de las políticas sociales

En la última década, las mejoras en los niveles de consumo de los sectores populares no se encuentran exclusivamente relacionadas con las políticas sociales, sino principalmente con los cambios en el modelo productivo y en el mercado laboral. Sin embargo, las políticas de transferencias monetarias han ocupado una función importante, tanto para mejorar condiciones vinculadas con la indigencia y la pobreza, como también para impactar, aunque en menor medida, en las mediciones sobre desigualdad. Para ejemplificar lo antedicho son ilustrativos los datos sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH): “con la AUH, los indicadores de indigencia se reducen entre un 55 y un 70 por ciento, retornando así a los mejores niveles de la historia argentina (los de 1974, resultado que se alcanza cualquiera sea el índice de precios utilizados para establecer el valor de la canasta de subsistencia); luego de la AUH,

el indicador más arquetípico de desigualdad (cuántas veces ganan los ricos más que los pobres) se reduce más del 30%, llevando a que la Argentina sea ahora el país más igualitario de América Latina (ranking otrora comandado por Uruguay, Venezuela y República Dominicana); por primera vez en décadas, la AUH ha logrado que los grupos poblacionales históricamente más vulnerables (como niños, madres solteras o familias numerosas) tengan una menor probabilidad relativa de indigencia que el resto de la sociedad; y la AUH también ha reducido los indicadores de pobreza, aunque en mayor medida los de intensidad que los de incidencia” (Agis, Cañete y Panigo, 2010: 1).

Estos cambios han posicionado de manera decisiva el lugar que dentro de la política social argentina ocupa la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esta institución creció en centralidad ya que dependen de su gestión la ampliación de jubilaciones y pensiones que coloca a la Argentina en un lugar privilegiado en términos de cobertura en América Latina, la gestión de la AUH, el programa Conectar Igualdad, el programa Progresar, el programa PROCREAR y un conjunto de iniciativas que son un núcleo de la innovación en materia de políticas sociales. El crecimiento del presupuesto de la ANSES es paradigmático del período, ya que la incorporación de los fondos de las AFJP posibilitó la expansión de las coberturas, a la par de la fuerza simbólica que implicó la estatización de esos fondos. Esta entidad incorporó nuevas modalidades de gestión sobre los formatos del sistema previsional. Con esto queremos decir que para obtener una prestación se debe realizar una presentación administrativa que acredite cumplir los requisitos: no se prevé intermediación comunitaria, ni tampoco se requiere asistencia o evaluación profesional.

La importancia del ANSES para la política social también es la importancia de una modalidad de gestión de lo social-asistencial desde otro registro. Podríamos decir desde una modalidad cercana a la lógica previsional o de seguridad social, pero quizá sea sensato componer más este registro de un tipo de lógica previsional pero sin vinculación directa con la experiencia de trabajo formal. Esto se vinculará con el apartado en el que trabajemos sobre novedades o preguntas sobre la sociabilidad en la que se inscriben estas prácticas, pero también muestra la preeminencia de una forma de institucionalidad diferente a la que era gestora de las políticas de asistencia.

Por otro lado, varias de las políticas que han aportado de manera relevante en el mejoramiento del consumo tienen precariedad en su legalidad y pueden quedar presas de la inflación. Que pueda avanzarse en la

aprobación de una ley que incluya a la AUH y que pueda, como sucede actualmente con las jubilaciones y pensiones, incorporar una cláusula de ajuste de los montos de acuerdo a la inflación aparece como un requerimiento de consolidación importante.

En otras políticas, como por ejemplo la de salud, la recuperación de la intervención estatal ha garantizado también consumos, ya no monetariamente en este caso. El programa Remediar, que es uno de los más relevantes de la gestión del Ministerio de Salud, se centra sobre la mejora en los consumos de medicamentos.

Las instituciones comunitarias cambiaron sus ejes, ya que la pérdida de la intermediación de los recursos asistenciales, especialmente de los recursos alimentarios, ha generado otras preocupaciones y actividades en las organizaciones que supieron reconvertir su práctica (Testa, 2012).

Consumo, políticas sociales y derecho a la asistencia

Las transferencias directas mejoraron las posibilidades de consumo popular y también modificaron algunas constantes de la política asistencial que proponían modificaciones en los sujetos a partir de las prestaciones asistenciales otorgadas. Podemos decir que las prestaciones que señalamos no tienen como objeto generar cambios en las actitudes, capacidades o conductas de los sujetos, sino que se plantean como reconocimiento de un derecho al acceso a las prestaciones monetarizadas. En este sentido se ha avanzado en el derecho a la asistencia como una forma de asistencia “legitimada”, tomando los términos de Alfredo Carballada.

Esta forma de asistencia también tiene efectos en las demandas de sectores medios. La AUH tiene entre sus receptores a miembros de las clases medias bajas y su portación no implica formas estigmatizantes como otras políticas sociales asistenciales. En otras palabras, el modelo de asistencia y promoción que caracterizamos en estudios anteriores (Arias, 2011) estaría superado por un nuevo modelo que modifica la intervención asistencial por modalidades integradoras a partir del consumo. Si en la etapa anterior se describía la asistencialización de la política social, en esta etapa podríamos hablar de una previsionalización de la política social y también fuertemente de una monetarización de la misma.



El acceso a los distintos satisfactores que reconocen nuestros entrevistados se plantea de manera “no mediada”, o en todo caso la mediación del dinero aparece como una mediación tan naturalizada que se presenta como inexistente. La posibilidad de comprar alimentos, útiles o vestimenta, pudiendo elegir lo que se obtiene, se identifica como un avance no sólo en términos de subsistencia, sino también en términos de reconocimiento y aumento de la autonomía. El dinero como sinónimo de acceso “libre” aparece como obviedad y con un efecto igualador. La identificación de las transferencias como derechos aparece asociada a la superación de las lógicas focalizadas, a las formas de gestión del recurso y también en el tema de que sean prestaciones monetarias.

En los contextos de mayor pobreza, estas transferencias igualmente coexisten con otras prestaciones asistenciales tradicionales. Puede verse en el testimonio de una entrevistada: “ustedes tienen en los barrios, por ahí, la compra de algún ladrillito, algo para ir mejorando, para ir cambiando un poco la casa. La mejora familiar contaba con todo esto y en la administración se separaba o se contaba ya con que ese gasto no iba a existir. A mí me llamó la atención en la época del paro docente que en la mesa de gestión lo que reclamaban era que no se suspendieran los comedores, por ejemplo”. Otra entrevistada: “comparto mucho lo que vos decís. Es como que algunas necesidades la organización familiar sabe que las tiene cubiertas por algún lado, de alguna manera. Entonces se distribuye el ingreso como para acceder a otra necesidad. Me pasa, lo vemos bastante nosotros a eso. La leche es de acá, la mercadería se la pido a los trabajadores sociales, y se rearma todo, es una organización”.

Consumo y goce: darse el gusto hoy

El aumento del consumo ha posibilitado ciertos goces que se vinculan con formas de vida deseables. El festejo de los cumpleaños o la posibilidad de la fiesta aparecen como indicadores poco mensurables desde las políticas y sin embargo son centrales en la estructuración de las vivencias.

Ciertos consumos se han vinculado, por ejemplo, con mejoras de los sistemas de políticas universales, como la compra de útiles para las escuelas de los niños o los aumentos en los niveles nutricionales de los niños. Tener cierta disponibilidad o alivio de las necesidades más urgentes posibilita otras búsquedas tales como la de formación.

Sin embargo, el consumo como estructurador de procesos de integración deja sin respuesta o –mejor dicho– potencia algunos problemas de orden social que tienen que ver con la manera en que se estructuran otros procesos de integración.

Consumo y sociabilidad

“Si el consumidor se inviste como soberano, la ley será la ley del consumo” (Lewkowicz, 2004). ¿Cuál es el tipo de sociabilidad en la que se inscribe este derecho justamente reconocido? ¿Quién es este otro sobre el que opera la restitución de este derecho? Es paradójico el dilema que se presenta con el avance del consumo como forma de integración, especialmente a partir de estas formas de consumo que aparecen *a priori* despejadas de otras identidades. A diferencia de lo analizado durante el primer peronismo, en el cual se vinculaban los avances en materia de consumo con el reforzamiento de la identidad de los trabajadores, estas formas de aumento del consumo se dan en momentos en los cuales cuesta determinar cuál es la categoría identitaria que aparece relacionada. ¿Será la categoría de consumidor?

Algo incomoda a quien escribe identificar estos avances con reforzamientos de la categoría de consumidor, o con definir que el derecho a la asistencia sea homologable (¿superado?) por el derecho al consumo, quizá porque el reforzamiento de la categoría de consumidor se inscribe en el conjunto de transformaciones del neoliberalismo. Lewkowicz explicó con maestría cómo una de las transformaciones más significativas de la soberanía era la estructuración de la figura del consumidor como el sujeto de derecho por excelencia de las transformaciones de la modernidad tardía. Estas transformaciones de la soberanía tenían que ver con la pérdida de la figura histórica del Estado como garante de los derechos del pueblo. En este esquema los consumidores rompían el monopolio del ciudadano en materia de derechos. En palabras del autor: “la relación social ya no se establece entre ciudadanos que comparten una historia, sino entre consumidores que intercambian productos. La representación estatal ya no es la representación sustancial, sino la de una configuración instantánea del mapa de los encargos de los consumidores” (Lewkowicz, 2004). Sin embargo, a diferencia del período sobre el cual Lewkowicz escribe, en este podemos identificar crecimiento de

la centralidad del Estado –sobre todo del Estado Nacional– y una rejerarquización de la política y de la disputa sobre temas de “lo nacional”, que no pueden homologarse a las descripciones realizadas en donde el Estado aparecía como resumido a su función técnico-administrativa o como “configuración instantánea del mapa de los encargos de los consumidores”. En este sentido, no parece este crecimiento del consumo identificarse como parte del proceso neoliberal.

Más allá de lo que planteamos en el párrafo anterior, el problema persiste, y los derechos que aparecen con un grado mayor de avance parecen asociarse a la lógica del consumo y del consumidor como sujeto. Hemos sabido mejorar muchísimo más rápido las operatorias dirigidas a paliar la carencia o a posibilitar o igualar un consumo en términos de transferencias individuales –especialmente dirigidas a las personas– que en modificar espacios institucionales de acuerdo a los nuevos derechos –leyes, reformas, etcétera– o sistemas tradicionales de la política social, salud y educación particularmente.

En la relación entre identidad y consumo algunos bienes parecieran ocupar un lugar relevante, especialmente para las y los jóvenes: las gorras, las zapatillas, los celulares, etcétera. Ocupan un lugar importante como expresión de identidad. Uno de nuestros entrevistados nos planteaba “en la identidad cultural de los pobres, el tema de la vestimenta fue creciendo entre los pibes, y a veces eso no llega a otros sectores. Es un tema cultural que pasa en la sociedad porque muchos pibes hoy en día por vestirse de forma diferente son mirados con prejuicios por parte de la policía o de otra gente, o cuando buscan un laburo. Hablo más desde los jóvenes, que es lo que estoy trabajando y ahora militando un poco más con los vecinos. (...) La música, la ropa o el tiempo libre son importantes para ellos. Me interesa ver la manera en que esos jóvenes pueden tener espacios donde puedan ser protagonistas, desde lo que utilizan, o lo que escuchan”. Como puede verse en esta cita, estos consumos también operan en las estrategias de diferenciación y de resistencia. Se usan ciertos bienes aunque traigan problemas, por ejemplo, con la policía, por su identificación con categorías juveniles populares. Sin embargo, se trata de bienes generalmente costosos, como las zapatillas.



Límites del consumo

Como ya demostramos en anteriores artículos (Testa, 2012), un repertorio de nuevas demandas en las organizaciones se relaciona con las violencias, los consumos problemáticos de drogas, los inconvenientes asociados con robos, etcétera. Para estos temas los consumos o las transferencias monetarias parecen no poder llegar: “hay algo de esa plata que dejó a una franja de los adolescentes medios adultos, jóvenes pero ya con pibes, que les da la posibilidad o de ir al Fines, o de volver a repensar su proyecto de vida. A mí me parece, por distintos casos que hemos visto de jóvenes con responsabilidades y con líneas de trabajo de adultos, que la asignación universal les da el derecho de repensarse a ellos mismos como individuos. Las trasferencias económicas dejaron saldadas ciertas coberturas y pueden volver a algún taller, o a algún oficio, o al Fines. Hubo una llegada de estos pibes y también hay alguien que los recibe. Por ahí no la escuela, pero en este marco del Fines y en la escuela más comunitaria, barrial, más real para nosotros, nos da números de presencia de pibes en la iglesia o en comedores más reunidos. Por ahí en otro momento tenían que estar cartoneando. La [AUH] vino, para nosotros, a cubrir eso. Algo de lo simbólico que queda ahí como sin poder resolverse, simbólico y real. Que la gente tiene problemas de consumo es real, pero es algo que no tiene que ver con lo materialmente saldable”. Lo que nuestra entrevistada dice magistralmente como no “materialmente saldable” es un requerimiento de intervención que desafía los formatos administrativos y que Ana Gómez describe como problemas de intervención en la complejidad (Gómez, 2012) en los que, por ejemplo, los tiempos de acompañamiento y el tipo de respuesta esperable interpelan a instituciones que parecen por momentos “sin saber qué entregar”.

De alguna manera, parece mantenerse aquello que señalábamos anteriormente sobre las políticas asistenciales tradicionales, en las que planteábamos que las estrategias promocionales no podían limitarse a la intervención sobre los asistidos, ya que no se trataba de problemas de los marginados o de los márgenes, sino de problemas del centro de la sociedad, de sus principales mecanismos de generación de sociedad.

Si la política asistencial tradicional no ha sido el mecanismo para modificar los problemas de sociabilidad críticos, tampoco lo es el reemplazo por las políticas de transferencias monetarias. “También creo que se generaron muchos hábitos, por lo menos con el tema de la asignación universal, con

las libretas, las vacunaciones, la escuela. Muchos hábitos positivos en un montón de familias. Lo negativo no sé si fue generado por esas transferencias de ingresos, es algo que la sociedad misma trae y que esta generación de ingresos nuevos no lo va a poder resolver, que tiene que ver con otras cosas, con la sociedad misma, en la ruptura de los lazos familiares, de los conflictos entre vecinos, de la violencia, de los rechazos, de todas esas cuestiones que no está pudiendo resolver una transferencia de dinero. Nosotros, el recurso humano que está en el territorio –todos, no solo los trabajadores sociales, porque hay mucha gente en el territorio trabajando suelta–, no estamos pudiendo trabajar para modificar esa cuestión que trae más problemas a la gente que el plato del día, traen más angustias los conflictos de las familias del barrio. Por ejemplo, hay muchas familias con problemas de violencia o adicciones. No se acercan al servicio porque no tienen para comer ese día, sino porque tienen al hijo que está perdido con las drogas, o al marido que no pudo salir nunca del alcohol, o al hijo que dejó la escuela y no hay forma de que vuelva porque el de al lado le ofreció algo más interesante. Con esas cosas a veces tenemos pocos recursos para trabajar con la gente”.

La proliferación de modalidades de consumo aparece a la vez como soporte y como potenciador de algunas de las situaciones descriptas como problemáticas.

Trabajar o estudiar

La relación entre ingresos y trabajo ha perdido cierta relación lineal para los sectores populares (Merklen y Kessler, 2013). Sin embargo, esto aparece de manera compleja en las lecturas que sobre ese hecho realizan los referentes sociales que hemos podido entrevistar, para quienes el trabajo sigue siendo un valor de referencia para la idea de dignidad.

Los problemas vinculados con la educación parecen más cerca de los sistemas que de las pretensiones o los deseos de las personas. El incremento en la matrícula de las nuevas universidades, el crecimiento exponencial del plan Fines, además de los relatos que hemos podido encontrar en las entrevistas que realizamos, colocan a la educación en un lugar sumamente relevante para el conjunto de los sectores populares. “Nosotros decimos que en los barrios hoy salen a laburar, que comprendieron. Pero no la gran mayoría. Comprendieron que el trabajo es la fuente de

poder, el motor social que te da mayores posibilidades de crecimiento desde lo económico, lo cultural o lo social. Hay personas que a eso todavía no lo vieron, no lo comprendieron, y son generaciones y generaciones. Porque en cuarenta años nos hicieron mierda, no podés entonces recomponerlo, son como dos o tres generaciones que vivieron lo mismo, sus papás estuvieron hechos mierda, sus hijos también, y sus hijos vieron a sus padres y a sus abuelos hechos mierda. Recién ahora están empujando a ver otra cuestión, en donde muchos pudieron entender la lógica. No se quedaron con eso y bueno, salieron a enfrentar la realidad, a conseguir laburo, a pelearla y a lucharla, y a recuperar esos derechos. Hay otros que todavía no, y ahí tenemos un gran déficit". Otro testimonio pide "que se pueda respetar la música, la ropa, que no sean vistos con el prejuicio de pibes chorros, como los pibes que tienen problemas, sino que puedan ser respetados en la sociedad, porque hay muchos pibes que se visten así y que hoy trabajan o van a la escuela secundaria. Nosotros tenemos nuestros prejuicios también, no es sólo como te ven los medios, muchas veces el vecino, el barrio, que son los chicos de Bajo Flores, o son los chicos de Soldati. Estamos llenos de prejuicios".

El trabajo sigue siendo el lugar de referencia para pensar las formas de participación e integración social. Sigue siendo el lugar deseable, especialmente en los entrevistados miembros de organizaciones sociales. Esto en algunos casos convive con la valoración positiva de las transferencias y de los beneficios, y en otros relatos aparece como crítica a lo ineficiente de las políticas que no logran "sacar" a las personas de las situaciones que atraviesan. Ante una pregunta acerca de si cambió algo en los últimos años con las políticas que tienen como objetivo mejorar el nivel de ingreso, una entrevistada respondió: "no, porque no están preparados. Mandalos a estudiar. Tuviste un bebe, ¿tenés trece, catorce, quince años? Bueno, estudiá. Te damos la asignación pero estudiá. ¿El día de mañana qué va a ser de esa criatura?".

Aumento del consumo y desafíos para lo público

Desde una perspectiva macrosocial Fernando Filgueira identifica una serie de desafíos que suponen el aumento de los consumos para los sistemas de políticas sociales en América Latina. Uno de ellos refiere a que si no se

modifica la pauta actual, lo que sucede es que las personas que se encuentran mejor se proponen consumos de los sectores medios, en su mayoría con tendencia hacia consumos segmentados y obtenidos en el sector privado. Esto debilita a los sistemas públicos, y se ve con claridad cuando la posibilidad de mejora económica conlleva la opción de abandonar el sistema público de educación, transporte, etcétera.

A su vez, esto también genera problemas de sustentabilidad política: "el problema con estas estrategias y sus límites en forjar coaliciones distributivas es que las mismas generan crecientemente una sensación de 'injusticia fiscal' que afecta la posibilidad de seguir fortaleciendo las capacidades fiscales del Estado. La percepción de los sectores medios de la población es que aportan fiscalmente a un Estado que les da pocos beneficios. Ello es en rigor falso, ya que estos mismos estados han expandido en muchos casos más los subsidios a sus prestaciones contributivas en salud y seguridad social que a los sectores pobres en materia asistencial. Pero los regímenes contributivos desfinanciados esconden por su propia naturaleza estos subsidios, en tanto se hacen evidentes también por su propia institucionalidad y criterios los subsidios a las poblaciones pobres" (Filgueira, 2013: 41).

El desafío planteado de reconstrucción de lo público no refiere únicamente a falencias presupuestarias. Muchas veces ni siquiera puede explicarse desde allí el problema. Con claridad una de nuestras entrevistadas nos decía: "a las escuelas se les ha hecho una importante transferencia de recursos y la lectura que yo hago es que no es suficiente, porque después de mucho tiempo de que las escuelas, sus directivos, sus equipos, estuvieran tratando de ver cómo paliar la crisis, cuando está la plata no se sabe cómo, por dónde empezar, qué hacer, y concretamente en Cárcova, las escuelas estaban demasiado deterioradas".

Este deterioro puede profundizarse incluso más si los sectores medios optan por prestaciones del sector privado.

Conclusiones

Sin dudas, que los sectores populares puedan mejorar sus posibilidades de consumo es una excelente noticia, y su limitación un argumento del que es más que conveniente desconfiar.

No es casual que uno de los organismos que mayor grado de readecuación a las nuevas expectativas haya sido la ANSES. Las modalidades asistenciales anteriormente denominadas como propias del modelo de asistencia y promoción han sido superadas por nuevas formas de reconocimiento del derecho a la asistencia.

Como toda modificación social, el nuevo esquema presenta nuevos desafíos y exhibe como piso algunas cuestiones que anteriormente se presentaban como techo. Esto necesariamente conlleva nuevas claves de lectura y otros desafíos políticos e intelectuales.

En este marco, debería llamarnos a la reflexión la pregunta acerca de si el sistema de políticas públicas puede descansar centralmente en la distribución monetaria sin intervenir en la modificación de los sistemas universales de política pública. Entre otros problemas, se encuentra lo señalado con relación a la tensión que genera sobre la presión política de los sectores medios. “Si la opción que ofrecen los estados a las nuevas clases emergentes de la región es la de aumentar su poder de compra privado, los pobres quedarán solos y las presiones distributivas se harán inmanejables. Si, por el contrario, el Estado logra contribuir en generar con responsabilidad fiscal un piso básico común para los sectores pobres y medios que éstos valoran y defienden, las presiones distributivas serán más moderadas y el camino al desarrollo más solidario” (Filgueiro, 2013: 94).

La estructuración de identidades centradas sobre el consumo es sumamente crítica, en tanto su redefinición opera dentro de códigos propios de la cultura popular. El consumo no parece garantizar el techo de expectativas de los sectores populares, en las cuales las perspectivas sobre lo educativo y lo laboral siguen siendo elementos centrales para la valoración de la vida deseable. En este sentido, queda claro el lugar de piso que suponen estos aumentos del consumo y, una vez más, el problema no se resuelve por la vía de la modificación de los sujetos, sino de las condiciones que habilitan a la participación en distintos proyectos de desarrollo. La importante disposición al involucramiento de los sectores populares en las iniciativas que valorizan la escuela y la universidad son muestras de lo dicho.

Bibliografía

Agis, E., C. Cañete y D. Panigo (2010): *El impacto de la Asignación Universal por Hijo en Argentina*. Buenos Aires, CICCUS/CEIL-PIETTE.

Arias, A. (2012): *Pobreza y modos de intervención. Aportes para la superación del modelo de asistencia y promoción*. Buenos Aires, Espacio.

Figueiro, P. (2013): *Lógicas sociales del consumo. El gasto improductivo en un asentamiento bonaerense*. Buenos Aires, UNSAM.

Filgueira, F. (2013): “Los regímenes de bienestar en el ocaso de la modernización conservadora: posibilidades y límites de la ciudadanía social en América Latina”. En *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, volumen 22, N° 2, ICP, Montevideo.

Gómez, A. (2013): “¿Nuevos problemas o respuestas viejas?”. En M. Testa: *Trabajo Social y Territorio. Reflexiones sobre lo público y las instituciones*. Buenos Aires, Espacio.

Kessler, G. (2011): “Exclusión social y desigualdad. ¿Nociones útiles para pensar la estructura social argentina?”. En *Laboratorio/on line, Revista de estudios sobre cambio social*, año XII, número 24, verano. Buenos Aires, Instituto Gino Germani.

Kessler, G. y Merklen D. (2013): “Una introducción cruzando el Atlántico”. En Castel, R.; Kessler, G.; Murard, N. y Merklen D.: *Individuación, precariedad, inseguridad. ¿Desinstitucionalización del presente?* Buenos Aires, Paidós.

Lewkowicz, I. (2004): *Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez*. Buenos Aires, Paidós.

Milanesio, N. (2014): *Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo*. Buenos Aires, Siglo Veintiuno.

Testa, M. (2013): *Trabajo Social y Territorio. Reflexiones sobre lo público y las instituciones*. Buenos Aires, Espacio.

Williams, R. (2000): *Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad*. Buenos Aires, Nueva Visión.